

ORELLANA BENADO, M. E. “Identidad y política”. En su *Enriquecerse tampoco es gratis. Educación, modernidad y mercado*. Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 2013. pp. 73-92.

M. E. ORELLANA BENADO

Enriquecerse tampoco es gratis
Educación, modernidad y mercado

 **Editorial**
USACH

5. Identidad y política

La identidad es un tema permanente de reflexión. Así lo ha sido en las más distintas culturas y en muchas disciplinas, desde la astronomía hasta la historia, la filosofía y la psicología. Hablamos acerca de objetos de múltiples tipos. Y cada clase de objeto presenta peculiares dificultades cuando queremos determinar si estamos o no frente a una y la misma cosa en distintos momentos. Hay objetos materiales, como la fragata Reina María Isabel, construida para la flota imperial rusa entre 1814 y 1816, comprada por Fernando VII en 1817 y capturada, según antes mencioné, por Manuel Blanco Encalada el 28 de octubre de 1818 en Talcahuano.

Hablamos también de objetos abstractos, como el número cinco y el círculo. Hay asimismo objetos de ficción, como la Celestina o Rocinante. Hay objetos que son los “sujetos de la conciencia como nosotros la conocemos y los objetos de reciprocidad y entendimiento”, en la embelesadora fórmula del filósofo londo-oxoniense David Wiggins para describir a los objetos que son también personas, como el lector y el autor del presente texto. Por último, para no extender el listado, hablamos también de objetos que son o fueron sujetos sociales y políticos, es decir, objetos históricos.

Hay muchísimos ejemplos de objetos históricos. Entre ellos están el pueblo judío y el pueblo mapuche, los pelucones que se opusieron a la independencia en Chile y los pipiolos que la promovieron, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la francmasonería y, desde luego, la Universidad de Chile (advierto, por última vez, que también en la presente sección diré solo la “Universidad”). Reconocemos asimismo el carácter histórico de algunos objetos materiales, como es o fue el caso de la fragata recién mencionada. Y si es arduo lograr consenso siquiera en filo-

sofía respecto a los criterios para determinar la identidad de los objetos materiales y los objetos abstractos, la dificultad se multiplica en el caso de los objetos históricos. Nadie en su sano juicio sostendría que cuando la futura ganadora del Premio Nobel de Literatura, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, pasó a llamarse en términos legales “Gabriela Mistral” (o cuando Ricardo Eliecer Nefalí Reyes Basualto oficializó su cambio de nombre a “Pablo Neruda”), una persona dejó de existir y otra surgió a la existencia desde la nada.

Pero las cosas cambian en el caso de la Universidad. La institución universitaria chilena, la universidad en Chile, tuvo cuatro nombres en sus primeros 266 años: Universidad del doctor angelical Santo Tomás (1622), Real Universidad de San Felipe de Santiago de Chile (1739-1818), Universidad de San Felipe del Estado de Chile (1818-1839) y el lacónico y definitivo Universidad de Chile (1839). ¿Por qué enfrentamos una situación por completo distinta a los casos de Neruda y de la Mistral en lo que se refiere a la Universidad? La razón es simple.

Las instituciones educacionales, en particular aunque no de forma exclusiva las que forman el núcleo dirigente y la periferia ilustrada o con opinión acerca de los asuntos públicos, determinan la identidad de las sociedades, en especial durante tiempos de paz. Forman a sus estudiantes para entenderse a sí mismos de maneras peculiares que señalan, entre otras materias, cuáles son sus orígenes y la naturaleza del tiempo histórico en que viven, así como cuáles son las fuentes del conocimiento y de la normatividad, es decir, el origen de las obligaciones que unen a los integrantes de una sociedad y que les permiten a éstos diseñar el futuro que compartirán.

En cada generación las sociedades mueren y renacen, conservando algunos de sus rasgos y adoptando otros según resuelvan sus conflictos políticos, asunto en cuyo corazón está determinar quiénes se harán cargo de la educación. Ahora bien, la instalación de la Universidad de Chile el domingo 17 de septiembre de 1843, con Bulnes Prieto como patrono y Andrés Bello como rector, marcó por cierto el inicio de una ruptura con la fase protorrepública de la institución universitaria chilena. Fue una ruptura en varios sentidos, de los que destacaré solo dos: el aumento en

el número de los académicos respecto de los antiguos catedráticos y el hecho de que la Universidad como tal perdiera la responsabilidad de la docencia.

Pero ninguno de estos hechos borra la continuidad didáctica y jurídica de la comunidad de maestros y discípulos, según ya argumenté. La generación de los discípulos de Bello impulsó lo que denominé “mito bellocéntrico”. En una imagen freudiana, la hija —es decir, la República— mató a su madre, la Universidad. Este es el principal trauma que la modernidad causó en Chile: el olvido del papel que la educación, en particular la Universidad, jugó en el aumento de la prosperidad, la libertad, la emancipación política y el surgimiento de la República forjada bajo Bulnes Prieto.

Un obstáculo formidable para debatir acerca de múltiples asuntos públicos de manera provechosa, incluida la identidad de la Universidad, es un déficit educacional de corte lógico o metodológico. A saber, que ni siquiera la mejor educación superior forma a las personas con una visión pluralista de la búsqueda de la verdad, ni respecto de los asuntos teóricos ni tampoco respecto de los asuntos prácticos. Este déficit es responsable de múltiples debilidades que sufren aún las sociedades modernas, como ciertas formas de argumentación que son pobres en información y maniqueas en su abordaje de los asuntos políticos. Su resultado final es una discusión infértil que aumenta la presión social porque impide resolver los conflictos políticos de manera racional y humana. Por este motivo y antes de seguir con nuestro asunto, tomaré un momento para esbozar aquí una visión pluralista de la verdad y su búsqueda.

Según el pluralismo, hay diversidad en la verdad y eso es bueno. El objetivo práctico del pluralismo es fomentar en las personas una actitud que valora la diversidad de la verdad al interior de un rango que es abierto (esto es, que trata con respeto más posiciones que la propia) pero, también, acotado (a saber, que no trata con respeto a toda posición). Una actitud tal es indispensable si se quiere promover el encuentro respetuoso, productivo y festivo del mayor número posible de personas, en par-

ticular los miembros de las distintas sociedades que tienen el privilegio de viajar y tratar con integrantes de otras sociedades.

Por ejemplo, en la segunda década del siglo XXI Chile pertenece al diez por ciento conformado por los países más ricos del mundo. Esta privilegiada ubicación económica es una verdad de corte empírico. Responde a un tipo de pregunta cuyo encanto consiste en que, cuando ella está bien definida, admite solo una respuesta correcta. Y que, cuando nos va bien, la encontramos observando el mundo en que vivimos e informándonos acerca de cómo está configurado.

Una variedad distinta de verdad son las verdades formales, que responden a las preguntas formales. Al igual que ocurre con las preguntas empíricas, cuando están formuladas con suficiente claridad y precisión, las preguntas formales tienen también respuestas únicas. Pero ahora las respuestas ya no se encuentran gracias a la observación, sino mediante razonamientos acerca de las reglas que gobiernan las combinaciones admisibles de símbolos en un lenguaje dado, con el que hablamos acerca del mundo. Estas son las combinaciones de elementos que los lógicos acostumbra llamar “bien construidas”.

Una tercera variedad de verdad es la que, solo con propósitos de introducción, propongo denominar de corte “humano”. En general, aunque no siempre, la respuesta a tales preguntas es *un rango abierto pero acotado* de posiciones que responde de maneras distintas. Cada una de estas respuestas tiene dimensiones de vocabulario, lingüísticas o conceptuales, otras que son institucionales, relacionadas con las redes de centros que producen y difunden las distintas concepciones y aún otra dimensión que es política, constituida por las alianzas y las rivalidades que hacen los partidarios de las distintas concepciones filosóficas no solo al interior de la filosofía misma sino también en relación con otros dominios de prácticas humanas, como la política, la ciencia, la economía o la literatura. Es decir, hay diversas posiciones por igual correctas, verdaderas o dignas de ser conocidas y tratadas con respeto por una persona educada, aunque no toda respuesta merezca ser tratada así.

La búsqueda de la verdad humana, la respuesta a una pregunta humana, consiste en el esfuerzo por delimitar dicho ámbito y discernir qué bien podemos tratar como valores o, incluso, vivir como valores. Las razones que avalan el respeto por una diversidad de respuestas a una pregunta humana varían. A veces una persona respeta una respuesta a una pregunta humana porque ella misma y los suyos *viven de forma reverente una de esas respuestas*. Tal cosa ocurre no solo con las prácticas religiosas, que son las primeras que vienen a la mente en relación con este asunto, sino también con prácticas de corte institucional, étnico, republicano e incluso gastronómico.

Otras veces se respeta una respuesta a una pregunta humana porque la persona que lo hace estima que bien puede tratar con respeto a quienes en sus vidas practican otras respuestas. Una cosa es respetar prácticas ajenas y aceptar que, para otras formas de vivir, esas prácticas cumplen funciones análogas a las que nuestras prácticas cumplen en nuestra propia forma de vivir. Así, por ejemplo, el católico que al entrar a la iglesia se descubre, cuando entra invitado a una sinagoga bien puede cubrirse la cabeza con una kipá. Pero tratar con respeto prácticas ajenas es muy distinto de ir más allá y pretender adoptarlas en la forma de vivir propia y, por decirlo de alguna manera, incluso “participar en sus fiestas”. Por ejemplo, las autoridades de gobierno que acuden a una sinagoga en Iom Kipur en señal de respeto no tienen razón alguna para ayunar ese día como sí lo hacen quienes practican el judaísmo.

Concluiré este boceto de la visión pluralista de la verdad y su búsqueda señalando que si bien esta visión pudiera dar la impresión superficial de proceder de tres maneras diferentes (la observación del mundo, el razonamiento acerca de reglas y la delimitación de un ámbito abierto pero acotado de respuestas por igual dignas de respeto), el análisis revela que las cosas no son así en último término. En todos los casos la búsqueda de la verdad procede de la misma manera. Intenta delimitar el ámbito abierto pero acotado de posiciones verdaderas, correctas o dignas de ser conocidas y, cuando corresponde, vividas y tratadas con respeto.

Más allá de los distintos métodos con que emprendemos esa tarea respecto de preguntas empíricas y preguntas formales, en ambos casos di-

cho ámbito está abierto de manera mínima, es decir, contiene solo una respuesta. Pero esta unicidad no impide reconocer que la búsqueda de la verdad en ámbitos distintos del empírico y el formal, como el que antes denominé “humano”, pueda concluir en un rango abierto pero acotado de posiciones que la persona educada aprende a *tratar con respeto* sin importar cuál de ellas sea la suya, es decir, la que provee de orientación normativa a su vida, la que *vive con respeto*.

Volvamos ahora y a la luz de esta clasificación de verdades y preguntas, a la pregunta acerca de la identidad de la Universidad de Chile. Estamos frente a una pregunta humana, es decir, una pregunta cuyo encanto reside justo en tener más de una respuesta que es inteligible y que preside el autoentendimiento de determinados grupos de personas, tanto al interior de la Universidad como en la sociedad chilena en general y de manera cambiante a lo largo del tiempo. A partir del siglo XIX, pipiolos, francmasones y liberales, tanto como los progresistas de izquierda durante el siglo XX, lucharon por limitar el poder del catolicismo en Chile.

La Universidad se sumó al esfuerzo por promover la libertad. Por esa razón negó su pasado y su herencia católica como un “artículo de fe”. Pero hoy ya cesó esa “lucha sangrienta” entre católicos y no católicos con la derrota de los primeros. Y la ley ordena que el pluralismo sea un principio orientador de la Universidad. La Universidad bien puede recuperar su historia prerrepública, reconocer su antecedente católico y, por cierto, seguir acogiendo a profesores y estudiantes católicos.

En 1813, al inicio del proceso de emancipación política de España, el primer censo de la población chilena arrojó un total de ochocientas mil personas y, según informó una expedición estadounidense que visitó Chile en la década siguiente, había entonces en el país unos diez mil curas y monjas. Mantener la misma proporción dos siglos más tarde, en 2013, supondría contar con más de doscientas mil personas consagradas. Pero su total es inferior a los dos mil, es decir, cien veces menos. Revindicar hoy el carácter laico del Estado chileno, según proponen algunos constitucionalistas en la segunda década del siglo XXI, es pretender que está viva la disputa sobre un asunto ya zanjado por los números.

Aunque, por cierto, el tradicionalismo católico que renació luego del golpe de Estado de 1973 tenga aún peso en el núcleo dirigente chileno, una realidad que en nada se vería afectada por una reiteración constitucional del carácter laico del Estado chileno. El debate de los asuntos morales, políticos y jurídicos relativos a la identidad religiosa de la sociedad chilena en el siglo XXI nunca menciona este cambio, la drástica disminución de las vocaciones sacerdotales. Pero, éste me parece mucho más significativo para responder la pregunta acerca de si Chile es o no un país católico que atender al porcentaje de la población que, cuando es censada, dice adherir a la Iglesia Católica Apostólica Romana.

He presentado aquí una visión de la identidad y misión de la Universidad de Chile que se contrapone al mito bellocéntrico. Tiene carácter retrospectivo e interpreta su historia como la historia de una comunidad de maestros y discípulos cuya existencia corresponde sea conocida, respetada y motivo de alegría para las personas educadas en Chile, amén de objeto de cuidado solícito del Estado encabezado por su patrono, el presidente de la República. Y señalé también por qué tal respuesta me parece más atractiva en el siglo XXI para la corporación misma, para todos quienes dedican sus vidas en Chile a la educación en los distintos niveles y, por último, para la sociedad chilena en su conjunto. Porque, en síntesis, muestra con claridad el objetivo último de toda educación digna de ese nombre: promover la libertad y la prosperidad de la sociedad.

¿Acaso no sería un motivo de orgullo legítimo y una fuente de inspiración para quienes son parte de su esfuerzo educacional, recordar que Chile cuenta con una universidad que cumplirá su cuarto centenario en menos de una década y que tiene por ley la obligación de promover el pluralismo, así como propender a su florecimiento académico en un contexto de gobierno tripartito, que incluye a sus estudiantes y a su personal de colaboración? ¿Qué oculta esta realidad de la propia Universidad, así como de la sociedad que ésta forjó y a la que sirve? De un lado el mito bellocéntrico, el peso de una noche positivista que ha durado ya setenta años, y del otro lado, las repetidas ocupaciones del Palacio de la Universidad y otros recintos universitarios por sus estudiantes y otros

jóvenes que, invocando causas nobles, interrumpen su funcionamiento y convierten dichos edificios en mamarrachos.

El desinterés por la identidad histórica de la Universidad en Chile es un vistoso ejemplo de una tendencia mayor durante la modernidad: el creciente desprecio por la historia y la filosofía, visible dentro de la elite y la periferia ilustrada, es decir, las personas con educación universitaria así como con interés y capacidad de influir en los asuntos públicos. Este último fenómeno tiene una causa que es de corte universal. La abundancia material que acompañó a dicho período histórico condujo al desprecio por la historia. ¿Para qué preocuparse del pasado, cuando todo lo valioso o acaba de aparecer o bien está aún por llegar? La sinergia de ciencia, tecnología y comercio pareció cumplir en clave secularizada la esperanza mesiánica judeocristiana: “lo mejor está aún por llegar”, para decirlo con el verso del poeta victoriano Robert Browning.

Para preguntarlo en rima, ¿quién en la modernidad con dinero para comprar y disfrutar preferiría rezar o estudiar? En los inicios del siglo XXI una vasta mayoría de las personas que se tienen a sí mismas por educadas evalúa las prácticas humanas solo en virtud de cuánto contribuyen éstas a la creación y acumulación de riqueza material. El dinero dejó de ser considerado un medio para alcanzar la riqueza espiritual e intelectual y se convirtió en un fin en sí mismo, un cambio de mirada que hizo estragos en quienes accedieron a la riqueza material viniendo de familias que jamás disfrutaron antes de ella. Esta ponzoña envenena a muchos de quienes, con el incremento de la riqueza material, hicieron su “estreno en sociedad”, quiero decir, los recién ingresados al núcleo cuyo privilegio es conducir la marcha de la sociedad. Para tales personas, el pasado es sinónimo de la triste condición de la que recién han salido y, por lo mismo, es un tiempo doloroso de recordar. ¿Qué interés pudiera tener la historia para ellos (y ellas) si los antepasados de sus hijos no tuvieron papeles estelares en lo sucedido?

Ya a mediados del siglo XIX, como he mencionado varias veces, una parte de la sociedad chilena comenzó a rebelarse y rechazar con vigor creciente su herencia hispana, católica apostólica y romana. Mencionaré a continuación las dos salvas inaugurales: la fundación en 1827

de la Logia Filantropía Chilena por un personaje que ha figurado ya varias veces en el presente ensayo, el almirante, general y presidente de la República Manuel Blanco Encalada; y, por cierto, el escándalo suscitado en 1844 por el exceso de celo de un fiscal que se horrorizó con la publicación de “Sociabilidad chilena” de Francisco Bilbao Barquín, ensayo que culpó por vez primera al catolicismo del retraso económico y político chileno de entonces. A partir de 1862 la rebelión anticatólica fue liderada por la Gran Logia de Chile y luego por el Partido Radical entre 1890 y 1950. En la segunda mitad del siglo XX este papel le fue arrebatado por el progresismo materialista y sus expresiones políticas, el Partido Comunista y el Partido Socialista.

Ricardo Krebs Wilckens, historiador católico chileno, resume el clima que antecedió a la fundación de la Universidad Católica de Chile a fines del siglo XIX, afirmando que “el liberalismo librepensador, el radicalismo ateo y la masonería anticlerical luchaban por eliminar la influencia que la Iglesia estaba ejerciendo... convencidos de que *el culto católico* constituía un anacronismo que frenaba el progreso”. He añadido el énfasis para destacar una infelicidad en la formulación de la tesis. El problema no era el culto, sino la vasta red de influencias y prácticas que tenía al culto en su centro.

Como anticipé en la primera sección, enfrentado a la rebelión anticatólica, un grupo de los profesores más tradicionalistas de la Facultad de Derecho de la Universidad la abandonaron a fines del siglo XIX, junto con otros profesionales egresados de ella pero que no eran profesores, como el abogado, ministro, parlamentario y terrateniente Ventura Blanco Viel, venerable patriarca del Partido Conservador, para fundar una casa de estudios superiores propia, la Universidad Católica. Dicha fundación tuvo el respaldo entusiasta de parte del núcleo dirigente de la sociedad chilena y recibió un amparo renuente del obispo de Santiago de Chile.

El Moisés y el Aarón de este éxodo fueron el abogado José Clemente Fabres Fernández de Leiva (1826-1908), quien luego de desempeñarse como decano de la Facultad de Derecho en la Universidad entre 1884 y 1888 pasó al año siguiente a desempeñar el mismo cargo en la Universi-

dad Católica, y el también abogado, periodista y parlamentario Abdón Cifuentes Espinosa (1835-1928), quien era miembro académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad. Cuarenta años más tarde, en 1929, un proceso similar permitió la fundación de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica.

También aquí el contexto histórico internacional es crucial para discernir el significado del fenómeno que estamos tratando de explicar. Me refero, en particular, a la irresistible ascensión durante la modernidad del mundo angloparlante, encabezado entre los siglos XVIII y XIX por el Reino Unido y, en el siglo XX, por los Estados Unidos de América. Este fenómeno impresionó a la minoría de americanos que pudo percibirlo en las que habían sido las regiones más florecientes del Nuevo Mundo por más de tres siglos. Al sur del Río Grande, muchos de quienes buscaron una explicación del atraso comparativo en el que se sumían los países surgidos de la desintegración del imperio español encontraron un inmejorable chivo expiatorio en la hispanidad y el catolicismo.

Reconocer el pasado indiano, virreinal o colonial de la Universidad era aceptar que el catolicismo había contribuido a la forja de la República de Chile. Esta confesión repugnaba por igual a los francmasones y, más tarde, a los “progresistas” de izquierda, empeñados en ampliar la esfera de la libertad en detrimento del poder de la Iglesia Católica, un largo, complejo y doloroso proceso que creó dominios de actividades religiosas, productivas, políticas e intelectuales independientes. El proceso cuyo resultado fue consagrado por el rector Hernández Jaque en 1942 con el mito bellocéntrico, comenzó en las postrimerías del siglo XIX, cuando la influencia intelectual de la primera generación de escritores chilenos educados en el positivismo del filósofo francés Auguste Comte y de su amigo el filósofo inglés J. S. Mill alcanzó su apogeo entre los políticos chilenos. Entonces se destruyeron y ocultaron las grandes obras públicas del siglo XVIII que testimoniaban los adelantos que tuvieron lugar en Chile bajo la dinastía Borbón.

El olvido de los progresos en las obras públicas chilenas durante dicho período tuvo su paroxismo en 1888, bajo el gobierno del presidente

Balmaceda Fernández, cuando luego de servir y adornar a la ciudad por más de un siglo, se dinamitó el Puente de Cal y Canto, una joya de la arquitectura dieciochesca comparable al Puente de Carlos IV sobre el río Moldava o Vltava que, hasta hoy, es admirado por quienes visitan Praga. Ocurrió lo mismo cuando concluyó la canalización del río Mapocho. Se rellenó el antiguo lecho y se plantó el Parque Forestal. Ocultos quedaron para siempre los tajamares, la otra gran obra pública del siglo XVIII. De esta ancha muralla de ladrillo de casi cuatro kilómetros de extensión, que impedía que la capital fuera anegada por las crecidas del río, y que fuera su primer paseo peatonal, hoy solo es visible un fragmento superior, de pocos metros de largo, frente a la calle Estados Unidos.

En un grupo creciente de las personas que cursaron la educación superior “laica y republicana” durante el siglo XX, el positivismo borró la raíz hispana y católica de la identidad chilena. Así los cuatro siglos de historia que pronto tendrá la Universidad fueron relegados al olvido. Usando otra vez la metáfora del psicoanalista judeomoravo Sigmund Freud respecto a “matar al padre”, podría decirse ahora que el positivismo buscó *matar a la Santa Madre*.

Volvamos ahora a la pregunta básica, ¿en qué consiste una institución universitaria? En una comunidad de maestros y de estudiantes cuya finalidad es preservar y aumentar el conocimiento; una comunidad que comparte salas de clases, bibliotecas, laboratorios, a veces comedores y hasta capillas; una comunidad que muchas veces cambia de sede en una ciudad o que abre sedes en otras ciudades y que confiere grados académicos bajo estatutos que también cambian. En una universidad la formación de los estudiantes está a cargo de quienes crean conocimiento, y no de quienes solo transmiten conocimientos o destrezas, como ocurre en un centro de capacitación profesional. Hablar de “universidades docentes”, expresión favorita de algunas autoridades y expertos chilenos en educación superior, es un oxímoron. Los establecimientos que solo ofrecen docencia y en los que los profesores no investigan ni crean conocimiento son centros superiores de capacitación. Gracias al libertinaje jurídico chileno, corporaciones guiadas por fines comerciales

y que no pretenden incrementar el conocimiento aún tienen derecho a hacerse llamar “universidades”.

Los cambios de estatutos, de localización e incluso de nombre de una institución universitaria importan muchísimo menos que la continuidad de la comunidad de estudio, que es un sujeto colectivo con historia. El dinero no compra una larga historia. Y ese es el bien que la Universidad y la sociedad chilena perdieron con el proceso de olvido que intenté reseñar en el presente ensayo. ¿Acaso no adornaría a la sociedad chilena saber que cuenta con una universidad que pronto cumplirá su cuarto centenario y conocer su contribución a la forja de la libertad, la prosperidad y la concordia?

Me detendré un instante para destacar una coincidencia sorprendente en la frontera que comparten los asuntos educacionales, filosóficos, históricos y políticos. A partir de la segunda mitad del siglo XX el esfuerzo de raigambre francmasónica y progresista de izquierdas por denigrar a las fases católicas, indianas o coloniales de la Universidad, por promover el olvido de las raíces católicas de la sociedad chilena y por borrar la contribución que la Universidad hizo al catolicismo durante tres siglos y dos décadas, encontró un apoyo entusiasta justo en el bando opuesto de dicha disputa; a saber, entre algunas historiadoras formadas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que también son devotas del mito bellocéntrico.

Una santa alianza de francmasones, progresistas y católicos presenta a la Universidad de Chile como una *creatio ex nihilo* republicana, una corporación sin raíces históricas, surgida de un golpe que se habría dado en la cabeza Andrés Bello, algo así como el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. Para terminar de entender el olvido en que ha caído la épica historia de la Universidad, tanto al interior de la corporación misma como en la sociedad chilena en general, solo falta sumar la desidia intelectual y la dificultad para maravillarse con la realidad y sus orígenes que caracteriza a buena parte de la clase social que es dueña de su tiempo. He aquí el más elocuente baremo de cuán mala es la mejor educación chilena.

Dejo hasta aquí este boceto del contexto intelectual y político en que surgió el mito bellocéntrico. En suma, este mito constituye la vertiente educacional del esfuerzo primero de corte “laico” y “republicano” y luego de corte “progresista” por ampliar la libertad y borrar de la memoria colectiva la enorme contribución del catolicismo a la constitución de la identidad chilena. Esta empresa redituó mucho a distintos sectores políticos desde fines del siglo XIX y, por cierto, tuvo éxito en ampliar la esfera de libertad disponible desde entonces en la sociedad chilena. Pero su costo fue inmenso: relegar al olvido la historia de la Universidad, que tanto contribuyó a forjar a la sociedad chilena. Somos más libres, pero al precio de ser más ignorantes.

Algún día será escrita una historia de Chile comenzando con el siglo de creciente oposición política que enfrentó el sector católico, aquel que por tres siglos tuvo el monopolio de las instituciones educacionales y el poder que se construye sobre esa base. Este fenómeno es parte de la explicación tanto de la intensidad como de la orientación que tomó el renacimiento del tradicionalismo en Chile después del 11 de septiembre de 1973. Este último engendró la reforma del Estado que a partir de 1981 pusieron en marcha los graduados de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encabezados por el abogado e historiador Gonzalo Vial Correa y luego por el también abogado Alfredo Prieto Bafalluy, quien fuera ministro de Educación entre diciembre de 1979 y abril de 1982.

Entre los gobiernos de los generales Prieto Vial, en la primera mitad del siglo XIX, y Pinochet Ugarte, en la segunda mitad del siglo XX, el Estado tuvo en Chile un virtual monopolio sobre la educación. Luego de la consolidación de la independencia en 1818 y por más de un siglo y medio, solo se permitió la participación en el “mercado educacional” a contadas instituciones privadas, las que estaban casi siempre bajo el control de comunidades religiosas o de comunidades de origen extranjero, las llamadas hasta la primera mitad del siglo XX “colonias residentes”. Las más destacadas excepciones fueron sendas aventuras educacionales del gaditano José Joaquín de Mora y del propio Andrés Bello en la primera mitad del siglo XIX. Tanto las corporaciones religiosas como las “colonias residentes” buscaban un fin legítimo: dotar a la identidad

de sus estudiantes de ciertas características, tales como pudiera ser una aproximación peculiar al cristianismo en clave anglicana, presbiteriana o luterana, o el dominio del alemán, el francés, el inglés, el italiano y, mucho más tarde, incluso el hebreo, así como el conocimiento de las culturas asociadas con esas lenguas.

Pero ninguna de esas comunidades buscaba enriquecerse o aumentar su patrimonio vendiendo “servicios” o “productos” educacionales. Todo esto terminó con la reforma del Estado de 1981. Pinochet Ugarte eliminó en todos los niveles las trabas para crear centros educacionales por parte de los ciudadanos, salvo las que imponían “la moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional”. Y, peor, evitó crear instituciones para supervisar el desempeño de tales centros. La liberalización del “mercado educacional” de Pinochet Ugarte equiparó la educación con la prostitución, al menos respecto de cómo son conceptuados los “servicios sexuales” en las sociedades liberales. Porque en esta última área, si el cliente y su proveedor están de acuerdo en el objeto y precio del servicio, el contrato celebrado es válido y no puede ser dejado sin efecto por el Estado. Así quedaron también las cosas en educación desde 1981 en adelante.

Para la Universidad, la reforma de 1981 fue una experiencia brutal y traumática. Tal vez no se buscó liquidarla. Pero muchos de quienes trabajaban en ella vivieron así la experiencia. La rectoría en las universidades del Estado la ejercían uniformados en servicio activo, los llamados “rectores delegados”, quienes obedeciendo la orden de sus superiores solicitaron a nombre de las corporaciones que encabezaban el cerceamiento de sus dependencias. Así la Universidad perdió su Instituto Pedagógico. Nada similar ocurrió a la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que conservó el privilegio de formar profesores.

A la Universidad también se le amputó su sede en Valparaíso. Así surgieron tanto la actual Universidad de Valparaíso como la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. La reforma fusionó varias sedes provinciales de la Universidad con las homólogas de la Universidad Técnica del Estado (la corporación que hoy se apellida “de Santiago de Chile” y cuya raíz más antigua es la Escuela de Artes y Oficios

fundada por el presidente Bulnes Prieto en 1849), dando origen a las “universidades regionales”. Fue el comienzo de la multiplicación de las universidades chilenas, un proceso de carácter milagroso que dotó a Chile de casi sesenta “universidades” en solo treinta años.

Según una visión histórica, retrospectiva e interpretativa, ahora que ya avanza el siglo XXI y a la luz de la argumentación precedente, se vuelve inteligible y atractivo para la sociedad que la Universidad forjó (incluidas sus corporaciones derivadas), leer su historia en términos que miran al futuro con un optimismo cauteloso, orgullosa de su contribución a la educación formal, al incremento de la riqueza material y a la ampliación de la libertad en Chile a lo largo de casi cuatro siglos. A continuación ofrezco una periodización de la historia de la colación de grados académicos, la gradual ampliación de los ámbitos profesionales y la expansión de la libertad en cinco fases, que bautizaré con los nombres de los primeros rectores que ejercieron el cargo en cada una de ellas.

Fase Salvatierra

Esta es la fase conventual o católica (1622-1758). Se inicia en 1622 con la ya mencionada instalación por la Orden de los Predicadores, y con fray Martín de Salvatierra como rector, de la primera comunidad de maestros y discípulos que otorgó grados académicos en la capital de Chile, que es el origen de la institución universitaria chilena. La Universidad, que entonces se denomina “del doctor angelical Santo Tomás”, pronto, ya en 1623, es seguida por una segunda comunidad, el Colegio Máximo de San Miguel de la Compañía de Jesús. Fusionadas ambas en el siglo XVIII, durante la siguiente fase dan origen a la Real Universidad de San Felipe de Santiago de Chile.

Ambas comunidades conventuales tienen su base jurídica en breves de los papas Paulo V y Gregorio XV, emitidos a solicitud de Felipe III de España, hasta el establecimiento en dicha ciudad de una “universidad pública” o “del Estado” o “Real”. Estos documentos confirieron a dos órdenes religiosas, los dominicos y los jesuitas, sendos privilegios

de otorgar grados académicos. Solo existían dos facultades: Filosofía y Teología, la primera una “herramienta” de la segunda. Comienza la colación de grados de bachiller, licenciado, magíster y doctor en lógica, filosofía y teología en el Valle Central. Los graduados quedan habilitados para tomar las órdenes sagradas y hacer “profesión de fe”.

Fase Ruiz de Azúa e Iturgoyen

Esta es la fase profesional liberal temprana (1758-1839), iniciada cuando prosperan las peticiones que el Cabildo comienza a dirigir desde 1713 a Felipe V de España, y cuando, por fin, el monarca reorganiza la institución universitaria chilena en 1739. En dicho momento ésta adquiere en términos jurídicos el carácter de Real Universidad y, en agradecimiento al monarca, el apellido “de San Felipe de Santiago de Chile”. Se instala recién en 1756, con el abogado Dr. Tomás Ruiz de Azúa e Iturgoyen como rector, y se dictan en ella las primeras lecciones en sagrados cánones y leyes o “ambos derechos” en 1758. La base jurídica es una real cédula. Las fundaciones conventuales pierden el derecho de otorgar grados académicos. La comunidad de maestros y discípulos que nació en sus claustros se proyecta en la Universidad, que ahora tiene cinco facultades.

Los estudios superiores, además de la abogacía, incluyen ahora a las otras dos “profesiones liberales”: la matemática (o, como diríamos hoy, ingeniería) y la medicina. Es decir, a las facultades de Filosofía y de Teología se suman facultades de Derecho, de Matemática y de Medicina. Los graduados quedan habilitados para realizar su desempeño “profesional” tanto dentro de la Iglesia Católica como fuera de su ámbito. Los estudiantes acuden desde el Valle Central de Chile y desde el Cuyo, el Chile transandino, Mendoza, San Juan y San Luis. La libertad comienza a ganar terreno.

Fase Meneses Echanes

Esta es la fase profesional republicana (1839-1888). La inaugura la segunda reorganización mayor de los estudios superiores chilenos, es decir, la iniciada entre 1839, bajo el gobierno del presidente Prieto Vial (cuando la Universidad adquiere el apellido “de Chile”, manteniendo, según vimos, tanto el reglamento de la Universidad de San Felipe como su rector, el abogado y presbítero Dr. Meneses Echanes), y su instalación en 1843, en virtud de la ley orgánica del año anterior, con el presidente Bulnes Prieto como patrono y con Bello como su segundo rector. Es una academia que otorga los grados aunque no dicta docencia, y que tiene a su cargo la superintendencia de toda la educación chilena.

La culminación de esta tercera fase en la historia de la comunidad de maestros y discípulos es la recuperación por la Universidad de la docencia bajo el rector Ignacio Domeyko en 1879 y el comienzo del florecimiento de la ingeniería y la medicina, que se suman al cultivo del derecho. La comunidad de maestros y discípulos se proyecta porque muchos miembros académicos de la Universidad tenían a su cargo también la docencia en la denominada “sección universitaria del Instituto Nacional”. El ascenso de francmasones en la Universidad y en las demás instituciones educacionales del Estado marca la continuada expansión de la libertad en Chile.

Fase Larraín Gandarillas

Es la fase pluriinstitucional protegida (1889-1980), comenzada con el referido éxodo de profesores de la Universidad que fundan en 1889 la Universidad Católica en la capital chilena, con monseñor Joaquín Larraín Gandarillas como su primer rector. Su fundamento jurídico es el respaldo que recibe del arzobispo de Santiago a la luz del derecho canónico.

Esta cuarta fase comprende seis fundaciones más. En 1919, la Universidad de Concepción, instalada con apoyo de la francmasonería pen-

quista, una activa comunidad con vocación de progreso y educación. En 1926, la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, fundada con el apoyo de la corporación de derecho privado del mismo nombre. En 1928, el inicio de las clases en la Universidad Católica de Valparaíso, fruto de otra fundación filantrópica, asociada con Isabel Caces de Brown y con profesionales locales, a la que la Santa Sede le concedió también la dignidad de “Pontificia” en 2003. En 1947, la Universidad Técnica del Estado, creada por el gobierno de Gabriel González Videla a partir de la fusión de la antigua Escuela de Artes y Oficios (1849), el Instituto de Ingenieros Industriales, el Instituto Pedagógico Técnico, así como, más tarde, diversas escuelas industriales y de minas fundadas en las provincias a instancias de Domeyko. En 1955, la Universidad Austral de Chile en Valdivia, también impulsada por una asociación de profesionales sin fines de lucro. Y, en 1964, la Universidad del Norte (hoy denominada “Católica del Norte”), fundada por iniciativa de sacerdotes jesuitas liderados por Gerardo Claps Gallo al alero de la Universidad Católica de Valparaíso.

En algo menos de un siglo, siempre por iniciativa y bajo la supervisión de instituciones que no buscaban incrementar su patrimonio (ni el de sus dueños, porque no lo tenían) con el negocio universitario, surge en Chile un total de ocho universidades. Gracias a la protección del Estado y la filantropía de privados, la prosperidad y la libertad se expande de la mano de la educación.

Fase Romo Román

Es la fase que comercializa la educación superior, iniciada en 1981 con la tercera reorganización de la institución universitaria, ejecutada por el gobierno del general Pinochet Ugarte y que se inauguró con la fundación a fines de 1982 de las primeras tres novísimas universidades, las privadas Gabriela Mistral (encabezada por Alicia Romo Román, la primera rectora chilena), Diego Portales y Central. Esta reforma, según recordé antes, autorizó a los ciudadanos para organizar corporaciones privadas sin fines de lucro y presentarlas en público como “universida-

des”, con mínimas restricciones y nula supervisión. Su puesta en marcha, como ya señalé también, fue acompañada por el descuartizamiento tanto de la Universidad como de la entonces Universidad Técnica del Estado. Los profesores que permanecieron en las universidades del Estado se vieron obligados a suplementar sus ingresos trabajando además para las “universidades” privadas. Así surgieron los llamados “profesores taxi”, docentes cuya jornada laboral se dividía entre las aulas y los taxis de los que entraban y salían mientras se trasladaban de una “universidad” a otra. ¡Otro aporte innovador de Chile a la educación mundial!

Luego de la reforma educacional de 1981 y en solo un cuarto de siglo proliferaron más de medio centenar de “universidades privadas” en múltiples ciudades chilenas. En 1987, luego de seis rectores “delegados”, uniformados en servicio activo designados por el general Pinochet Ugarte, su gobierno nombró rector al profesor José Luis Federici Rojas, quien solo alcanzó a desempeñarse por 69 días ante la creciente oposición de los estudiantes de la Universidad. Poco antes de renunciar el rector delegado profetizó, como ocurrió de hecho, que si él salía de la rectoría, al año siguiente Pinochet Ugarte perdería el plebiscito con el que buscaba renovar su mandato por ocho años. Una vez más, como en tantas oportunidades en su larga historia, la Universidad fue el barómetro de la política chilena.

En 2011, un movimiento ciudadano encabezado por estudiantes universitarios puso en el corazón del debate público la prohibición legal de lucrar con el “negocio universitario” y su incumplimiento bajo regímenes políticos de cuño disímil durante treinta años. Adaptando una fórmula del “antipoeta” Nicanor Parra Sandoval, podría decirse que, en Chile, la dictadura y la democracia unidas jamás serán vencidas. Durante 2012 se sumaron dos incidentes críticos. En primer lugar, un escándalo en el incipiente sistema de acreditación de la calidad institucional de las universidades chilenas. Un expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación fue a prisión mientras se investigaba la acusación de que habría cobrado diversas sumas a universidades privadas a cambio de promoverlas en el proceso que él custodiaba. Y, en segundo lugar, el naufragio de una universidad privada que fue clausurada a petición del gobierno del presidente Sebastián Piñera Echenique, y que dejó sin res-

guardo a decenas de miles de estudiantes, obligando a la administración del Estado a comenzar a diseñar instancias efectivas que supervisen y acrediten el funcionamiento de tales corporaciones.

6. La educación y el mercado

El presente ensayo ha examinado los altos costos educacionales que tuvo la modernidad, que he resumido en el desprecio por la historia y la filosofía así como sus consecuencias: formar un núcleo dirigente incapaz de gratitud, sin memoria ni identidad, y en el que la búsqueda de riqueza ha desplazado del centro de interés a la preocupación por los asuntos públicos. El más vistoso ejemplo de este empobrecimiento intelectual y espiritual es la visión que de sí misma tiene la Universidad de Chile. Aunque no se entera, la corporación está más cerca de su cuarto centenario (2022) que del centenario del cierre de su Facultad de Teología (2027).

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, un proceso de olvido creativo que tuvo una motivación libertaria, limitar el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ocultó la continuidad didáctica y jurídica de la comunidad de maestros y discípulos cuya primera raíz es la universidad conventual instalada en 1622. Este proceso de olvido del origen indiano, colonial o virreinal de la Universidad, así como del carácter católico de sus primeras tres etapas, decantó en el mito bellocéntrico, la tesis que el francmasón Andrés Bello habría fundado la corporación con las características que tuvo en la primera mitad del siglo XX.

El contexto internacional del mencionado proceso de ocultamiento y olvido es el alejamiento de la matriz normativa judeocristiana que experimentó una porción siempre creciente de la población, la que prosperó en términos materiales a medida que la modernidad avanzaba. Mientras aumentaba la riqueza material, cada vez más personas descubrieron que podían vivir “sin Dios ni ley”, como no fuera la ley que manda enriquecerse para disfrutar de los bienes y servicios que compra el dinero.